

2/21/77
ARGENTINA PROJECT (S200000044)

U.S. DEPT. OF STATE, A/RPS/IPS

Margaret P. Grafeld, Director

(X) Release () Excise () Deny

Exemption(s):

Declassify: () In Part () In Full

() Classify as () Extend as () Downgrade to

Date Declassify on Reason

AK156D

President Jimmy Carter
The White House
WASHINGTON

Oslo, February 17, 1979

We, the Norwegian delegates to the XIIIth International Cancer Congress in Buenos Aires in October this year, would like to address you, Mr. President, on a matter which has touched us and concerns us deeply.

Our visit to Argentina made us acutely aware of the severe manner in which Argentinian authorities violate civil rights, arresting and imprisoning thousands of people, including many of our scientific and medical colleagues and their relatives. We have been particularly concerned about the case of Sylvia Angelica Corazza, 28 years old, the wife of Alberto Sanchez who now works as a medical doctor - in Norway.

Sylvia Corazza disappeared in Buenos Aires on May 19th, 1977. At that time she was two months pregnant. In January 1978, Sylvia's newborn baby was delivered to her parents' home by agents of the federal police. The parents had to make a written statement that they would not give the baby to its father, Alberto Sanchez, and they were furthermore encouraged to persuade Sanchez, who had fled into exile in Brazil, to give himself up to the Argentinian police.

On request from Sylvia's father Andrés Corazza, the United Nations' Office for Refugees in Buenos Aires made an inquiry about her arrest, and on June 19th Mr. Moses Ruiz of that office received a letter from Mr. Juan Carlos Arigas of the National Executive Power, officially recognizing that Sylvia Corazza had been arrested and was being held in prison. A list of political prisoners, including her name, has been sent to the U.N.'s High Commissioner for Refugees.

During our stay in Buenos Aires, we sent a letter to Argentina's president Jorge Videla, asking him to effect the release of Sylvia Corazza and to permit her, together with her two children, to join her husband in Norway. The letter, which was conveyed through the Norwegian Embassy in Buenos Aires, has not been answered.

We appeal to you, Mr. President, to use your influence in an attempt to resolve this tragic case. We know and admire the strong position you have taken as a spokesman for human civil rights throughout the world, and we trust that the Argentinian government will respond to a request in your name for the release of Sylvia Angelica Corazza.

Yours sincerely,

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Director, National
Mass Radiography Service, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D.,
University Hospital of Bergen

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Research Associate,
The Norwegian Cancer Society, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Research Fellow,
The Norwegian Cancer Society, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D.,
Ullevål Hospital, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Professor,
The Norwegian Cancer Society, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D.,
Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Surgeon,
The Norwegian Cancer Society, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Surgeon,
The Norwegian Cancer Society, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D.,
Haukeland Hospital, University of Bergen

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D.,
Haukeland Hospital, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Head of Research, Therapy
Dept., Ullevål Hospital, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Senior consultant,
Oslo City Hospital

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Senior biochemist,
Norwegian Institute for Cancer Research, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Professor,
The Norwegian Cancer Society, Oslo

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D.,
Bergen Cancer Hospital, Bergen

Ellen Hartwein
Ellen Hartwein, M.D., Senior scientist, Norwegian
Institute for Cancer Research, Oslo

620103
R2117111

2/24/79 (5) 68 R

FORMULA INTERROGACIÓN .- SOLICITA S TENGA PRESENTE LO EXPUESTO .-

AX 034

Suprema Corte :

EMILIO FERMIN MIGNONE, por sí, con domicilio real en la avenida / Santa Fe 2949, piso 3o. A, de la ciudad de Buenos Aires y constituyendo el legal en el mismo, en los autos " PEREZ DE SMITH, Ana María y otros s/ pedido" (Expte. P - 51 RH), a V.E. digo :

Que soy firmante del escrito inicial del presente expediente peticionando por mi hija MONICA MARIA CANDELARIA, detenida en el domicilio arriba indicado el 14 de mayo de 1976 por un grupo armado que se presentó como perteneciente al Ejército Argentino, en un procedimiento con las características comunes descriptas en dicha presentación. Como se explica en ésta, la reiteración y las modalidades del arresto prueban acabadamente y sin lugar a dudas la participación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el hecho. Desde entonces nada he sabido de mi hija. Lo mismo ocurre con los 1.541 detenidos restantes (una mínima parte de los 30.000 existentes), por quienes sus familiares actúan en estos autos. Suscribo igualmente el escrito referido como letrado patrocinante en mi condición de abogado inscripto en esa Corte Suprema al Libro I, Folio 298.

En el carácter invocado he tomado conocimiento de la sentencia dictada por ese Tribunal que corre a fs 52/54 y 54 vta., con fecha 21 de diciembre de 1978 y que fuera notificada por cédula en el domicilio constituido, aprovechando la suspensión de los términos que establece la feria judicial, recién el 1o. de febrero de 1979. Chicana destinada, aparentemente, a sopesar la reacción del Poder Ejecutivo, al cual se hizo conocer la decisión por oficio despachado el 28 de diciembre de 1978.

Luego de reiterar su afirmación de incompetencia para conocer de la presentación en forma originaria, dice V.E. esquemáticamente lo siguiente en el / mencionado fallo:

1) " Que en las presentes actuaciones se han acompañado abundantes constancias, emanadas de diversos tribunales, de las que resulta que los magistrados han debido rechazar los recursos de hábeas corpus en razón de que las autoridades pertinentes han informado, sin más, que las personas a cuyo favor se interpusieron no se registran como detenidas".

2) " Que la circunstancia señalada importa, en definitiva, privación de justicia, con tanta mayor razón cuando como en la situación planteada, están en juego derechos fundamentales de las personas".

3) " Que la privación de justicia antes mencionada obedece a causas ajenas a las funciones y competencias específicas de los magistrados, quienes no están en condiciones de remediarla por su mera actividad jurisdiccional".

4) "Que la plenitud del estado de derecho exige esencialmente la vigencia segura y real del derecho en el seno de la comunidad y, por ende, la posibilidad de hacer efectiva la ~~XXXXXX~~ justiciabilidad plena de las trasgresiones a la ley y de los conflictos jurídicos. La función del derecho es la de realizarse. Lo que no es realizable nunca podrá ser derecho".

5) " Que los otros poderes del Gobierno de la Nación han de brindar toda su asistencia a los órganos del Poder Judicial para que éstos puedan hacer efectivos los derechos y garantías instituidos por la Constitución".

6) Y " que dada la privación de justicia antes mencionada obedece a causas ajenas a sus funciones y a la competencia específica de los magistrados, / quienes no están en condiciones de remediarlas por su mera actividad jurisdiccional".

ARGENTINA PROJECT (S200000044)

U.S. DEPT. OF STATE, A/RPS/TPS

Margaret P. Grafeld, Director

Release () Excise () Deny

Exemption(s):

Declassify: () In Part () In Full

() Classify as () Extend as () Downgrade to

Date Declassify on Reason

/// esta Corte considera un deber inexcusable ponerla en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional y exhortarlo urja las medidas necesarias a su alcance a fin de crear las condiciones requeridas para que el Poder Judicial pueda llevar a cabal término la decisión de las causas que le son sometidas, en salvaguarda de la libertad individual garantizada por la Constitución Nacional" .

/en

Afirma V.E. en resumen, que el país se da la situación de privación de justicia generalizada para millares de ciudadanos y sus familias. Que esta grave privación de justicia no puede ser remediada por los jueces ni por esa Corte por cuanto el Poder Judicial carece de los medios y condiciones para ello. Que esas carencias se originan en la omisión de otros poderes del Estado (en rigor de verdad uno solo, el Ejecutivo que, sumado a la Junta Militar, concentra los poderes administrativos, legislativos y constituyentes). Concluye V.E. , con palabras de Ihering que dado que el derecho no puede efectivizarse, en la República Argentina — puesto que de ella se trata y de ella habla esa Corte — , el derecho no existe. Circunstancia que no es nueva para la Corte Suprema por cuanto ya lo señaló en el caso "PEREZ DE SMITH, Ana María y otros s/ privación de justicia" en su fallo del 18 de abril de 1977.

Si lo dicho es exacto y tiene lugar desde el momento mismo de la integración del Alto Tribunal después del golpe de estado militar del 24 de marzo de 1976 y se mantiene hasta el presente — de lo cual no cabe duda porque lo sabe el país entero y lo afirma V.E. — , me pregunto, ingenua y lógicamente : ¿ cómo pueden permanecer ustedes, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus sitials, sin sentir afectada su dignidad de ciudadanos y de abogados, su ética de hombres ? Confieso que me resulta incomprensible y por eso, angustiado, trasmito la pregunta a V.E.

¿ O es que V.E. ha decidido aceptar en la estructura institucional del régimen un papel meramente decorativo, destinado a convalidar las constantes violaciones de los derechos y garantías fundamentales que se traducen en hechos ostensibles gravísimos y conocidos como detenciones ilegales seguidas de desapariciones; ejecuciones sumarias clandestinas; torturas sistemáticas; saqueos; vejaciones; prisiones indefinidas sin proceso ? Es decir la limitada función que, pareciera le asigna a la Corte el Poder Ejecutivo Nacional en su respuesta al oficio de V.E. en el primer caso "PEREZ DE SMITH y otros " al expresar que sólo le cabe " el valioso aporte de su ponderado juicio y reflexión" . Misión tan lejana de la que enfáticamente se asigna V.E. en los fallos comentados en el presente escrito, como cabeza de uno de los poderes del Estado y tribunal supremo de las garantías constitucionales.

El cuadro descripto no sólo no ha cambiado sino que se ha confirmado y acentuado, si esto era posible, con la respuesta remitida por el general que detenta de hecho la presidencia de la Nación a la exhortación de V.E. dispuesta en la / presente causa (conf.: " La Prensa" 17/1/79). En efecto, en esa comunicación no hay ninguna contestación concreta a la preocupación de V.E. ni compromete a su firmante a poner a disposición de la Corte Suprema y de los jueces inferiores los medios necesarios para el cumplimiento de su augusta tarea, como era el requerimiento de V.E., expuesto en forma de exhortación urgente y solemne. Sólo hay palabras y la monótona reiteración de propósitos genéricos, sin plazo de cumplimiento, palabras y deseos que no se compadecen con los hechos de público notoriedad que se suceden cotidianamente y que V.E. conoce (o puede conocer fácilmente) a travpes de los innumerables e infructuosos recursos de hábeas corpus que inundan día tras día los despachos judiciales de la Nación. ¡ Nunca en el país, Suprema Corte, se había abusado como ahora, desgastándolas, de tan nobles y sagradas palabras como las que a diario es escuchan en declaraciones y discursos, en contraste total con los hechos !

Comprendo, Suprema Corte, porque es humano, que V.E. quiera deslindar / responsabilidades para el futuro, particularmente en vísperas de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos; frente a los claros pronunciamientos del Papa y de la III Conferencia General

de los Obispos Latinoamericanos reunidos en Puebla, México; y en previsión del inevitable tribunal que un día juzgará a los responsables de los hechos motivo de la presente causa y a sus cómplices y encubridores.

Que todo se reduce a palabras lo pone de manifiesto la jurisprudencia sentada por esa Corte con posterioridad a la sentencia recaída en estos autos, en los casos Martínez, María Rosa, Juárez de Romano Hortensia del Carmen, Sepúlveda Gladys, Yañez G., todos sobre hábeas corpus. En esos pronunciamientos, suscriptos el 12 de enero de 1979, V.E., revocando los alentadores fallos de la Sala I de lo Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, ~~sienta~~ ~~establece~~ virtualmente la doctrina de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para disponer y prolongar indefinidamente los arrestos previstos, bajo el estado de sitio, por el artículo 23 de la Constitución Nacional. Al establecer que basta que el Ejecutivo afirme que el arrestado lo está por una conducta vinculada con las causas que dieron origen a la sanción del estado de sitio, sin otra explicación, la Corte abandona cualquier posibilidad de control de razonabilidad de las decisiones del poder administrador, como lo había enunciado la tradicional doctrina de ese Tribunal, cuando había jueces en la República. En otros términos: V.E. procura con palabras, similares a las que se escuchan en millares de discursos cínicos y vacíos que abruman a la sufrida población del país por todos los medios de difusión, salvar su insalvable responsabilidad ante los crímenes cometidos y que no cesan. Pero encuentra siempre la manera de eludir el menor pronunciamiento que imponga al Ejecutivo a disponer una libertad, limitar un abuso, sancionar un delincuente, mitigar un dolor. Vuestra Excelencia sabrá porqué, en el fondo de la conciencia.

Yo sólo formulo a V.E., con preocupación y angustia de ciudadano, con dolor de padre, con esperanza de cristiano esa interrogación, única conclusión lógica de los considerandos desarrollados por esa Corte y solicito se tenga presente lo expuesto.

ES JUSTICIA

Escrito presentado en la Mesa de Entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de febrero de 1979 .--

(5) 65

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION REVOCANDO LA SENTENCIA DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES, SALA PENAL, POR EL CUAL SE DISPUSO LA LIBERTAD DE UNA DETENIDA BAJO EL PODER EJECUTIVO NACIONAL.

NOTA: A fines de 1978 (Ver INFORMATIVO del CEDIHA - BULLETIN of CEDIHA --, Nro. 1, Año 1, pg. 5) la Sala Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal dictó más de un centenar de sentencias revocando diversos fallos de los Jueces Federales de Primera Instancia de la misma jurisdicción. Estos ~~XXXXXX~~ bían rechazado otros tantos recursos de hábeas corpus en favor de arrestados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de más de dos años, considerando que las atribuciones del Poder Ejecutivo no eran revisables. La Cámara estimó satisfactorias las explicaciones del PEN y de conformidad con la doctrina del control de razonabilidad judicial de las decisiones del PEN, dispuso su libertad. Esta no se hizo efectiva pues, en todos los casos, el Fiscal de Cámara interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En varios de los casos los informes in voce de los abogados ~~XX~~ patrocinados ante la Cámara habían sido notables piezas jurídicas que habían sido escuchadas y aplaudidas por muchas decenas de personas. Como es lógico se esperaba con ansiedad la decisión final de la Corte. Esta, como se advertirá por el fallo transcrito -- que es similar a todos los casos resueltos que superan el centenar --, revoca la sentencia de la Cámara. ~~XXXXXXXXXX~~ En otras palabras: sostiene que el PEN puede tenerlos detenidos sin causa indefinidamente mientras exista el Estado de Sitio. Tal decisión pone de manifiesto que la Corte se somete a la voluntad del Ejecutivo; no se anima a disponer ninguna libertad (tal vez porque teme no ser acatada); y renuncia a examinar las razones que motivan al Ejecutivo a mantener arrestadas por tiempo indeterminado a una persona, aunque no lo procese si ha cometido delito (violando de esa manera una obligación legal) y aunque la extensión del arresto, por su extensión, configure en realidad una pena. La Corte ha adoptado esta decisión luego del Fallo en la causa "PEREZ de SMITH y otros s/pedido" del 21 de diciembre de 1978 en materia de detenido desaparecidos. El fallo transcrito lleva fecha, al igual que muchos otros, de 12 de enero de 1979, durante la feria judicial.

Y - 4 XVIII - Yañez s. recurso de hábeas corpus .- Buenos Aires 12 de enero de 1979.- VISTOS... y CONSIDERANDO: que en atención a lo que surge del informe fs 39 y 85 que es asertivo sobre la relación entre la detención y las causas del estado de ~~XXXXXXXXXX~~ sitio y ~~XXXXXXXXXX~~ la doctrina sustentada por el Tribunal en " Zamorano, Carlos Mariano s/ hábeas corpus" del 15 de diciembre de 1977, "Tizio, Hebe Margarita s/ hábeas corpus" del 15 de diciembre de 1977, " Timerman, Jacobo s/ hábeas corpus", ~~XX~~ Considerando 6o. del 20 de julio de 1978, corresponde revocar la sentencia recurrida por no darse por ahora otras circunstancias que descalifiquen el ejercicio de la facultad propia del Poder Ejecutivo... Por ello y ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ con conformidad del señor Procurador General interino, se revoca la sentencia recurrida en cuanto fue materia del recurso extraordinario.- Notifíquese.- Adolfo R. Gabrielli.- Abelardo F. Ross Emilio M. Daireaux.- "